

Yair y Pablo

1

Yair Klein gritó “¡Fuego!” Cuando el Toyota se acercó a los blancos de cartón, los alumnos de los asientos de atrás sacaron el cuerpo por las ventanillas y descargaron sus metralletas mini Uzi.

Pablo Escobar no quiso participar en la exhibición final del primer curso de matones realizado en Colombia. Los instructores israelíes no le resultaban simpáticos. Quienes sí se encontraban aquel día de febrero de 1988 en el improvisado polígono de tiro de la finca El Cincuenta eran los Pérez y algún otro latifundista de la región del Magdalena Medio, el alcalde de Puerto Boyacá y algunos oficiales del destacamento local del ejército, como el coronel Luis Bohórquez. Hacía los honores de la casa Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, que parecía el más entusiasmado con el curso que acababa de diplomar a 30 nuevos sicarios, entre los que se hallaba su hijo Freddy. “Hemos gastado en cada uno de ustedes más de un millón y medio de pesos, y recuperaremos ese dinero hasta el último centavo”, manifestó en un discurso improvisado el considerado, después de Escobar,¹ el segundo capo del cartel de Medellín.

¹. La reconstrucción de las escuelas de sicariato y de la realidad vivida en Urabá está basada en los testimonios realizados por varios paramilitares arrepentidos ante el Tribunal Especial, como Diego Viáfara y Jesús Alberto Molina Herrera, y en los informes del DAS sobre la actividad de Acdegam en Puerto Boyacá, publicados en 1989 por la revista *Semana*, y los periódicos *El Tiempo*, *El Espectador* y *La Prensa*. Muchos detalles se han tomado de Medina (1990) y de Duzán (1992).

El Mexicano estaba orgulloso de su primogénito de 17 años, apodado Pocillo por sus considerables orejas, al que había regalado recientemente una motocicleta dorada. El jefe se lo podía permitir. Precisamente aquel año le había dedicado una portada la revista *Fortuna*, y *Forbes* lo había situado en la lista de los hombres más ricos del mundo, aunque lejos de Pablo Escobar quien, en el puesto 14, contaba con unas ganancias anuales de 3.000 millones de dólares. Don Pablo tenía su imperio a nombre de decenas de testaferros, reservando desde luego un lugar preferente a sus familiares más cercanos (su hija Juana Manuela era propietaria, a sus cuatro años, de 66 garajes, 34 parqueaderos privados, 8 oficinas, 12 revistas y 13 apartamentos).

Entre Escobar y Rodríguez Gacha no existía competencia. Se respetaban y temían mutuamente, y se habían repartido de forma ecuaníme las diferentes tareas y campos de actuación.²

Una vez concluida la aventura política que lo había llevado en 1982 al Congreso como diputado liberal, Escobar había preferido ocuparse del negocio del narcotráfico, del desarrollo de las redes de su distribución en el extranjero, y de las rutas aéreas y navales utilizadas para el transporte de la droga. Dirigía, asimismo, la guerra contra cualquiera que obstaculizara los negocios del cartel, comenzando por los narcos de Cali, y lideraba la cruzada contra la ley de extradición de los colombianos. “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, era desde hacía tiempo el lema de los narcos.

El Mexicano, por su parte, se hallaba comprometido en la lucha contra la guerrilla, con la que había empezado a enfrentarse hacía cuatro años en las selvas surorientales de Colombia. Según él, “las FARC primero empezaron a robar el dinero que mandábamos para comprar la pasta de coca, luego a asaltarnos y a intentar secuestrarnos”. Rodríguez Gacha se había expuesto a los chantajes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al invertir gran parte de sus ganancias en las tierras más fértiles del país. Su anticomunismo lo había acercado, por otra parte, a los generales, que hacía tiempo aplicaban la “doctrina de seguridad nacional”, aprendida en las academias militares norteamericanas de Panamá y Fort Bragg.

“Mientras el Estado les concede algunas medallas, yo los lleno de dinero”, dijo en una entrevista a la revista española *Interviú*. Rodríguez Gacha solía distribuir públicamente su propina, una vez al mes, a los mi-

2. Sobre las actividades de Escobar y Rodríguez Gacha, véase Piccoli (1994) y Castillo (1991).

litares del cuartel de Pacho, una población rodeada de plantaciones de cítricos, a dos horas en carro de Bogotá, donde era considerado una especie de dios. Solamente ahorraba el humillante desfile frente al bar de la plaza principal a los oficiales. Ellos podían encontrarlo en las haciendas de Chihuahua y Santa Rosa, donde recibían fajos de dólares y regalos sustanciosos, como los Rólex de oro. Aquellas atenciones tenían su vuelta. El ejército le permitía circular libremente por el país, a pesar de haber acumulado diversas órdenes de captura: las colombianas eran por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero sucio, y las norteamericanas por homicidio y conspiración. En más de una ocasión, los militares se habían ofrecido incluso a liquidar a algunos de sus competidores.

Escobar y Rodríguez Gacha habían llegado al Magdalena Medio cuando los latifundistas y los dirigentes locales de la Texas Petroleum Company, o Texaco (uno de los primeros grupos norteamericanos autorizados a explotar los yacimientos del país), estaban organizándose con la ayuda de los comandantes militares de la zona, para responder a la extorsión, cada vez más frecuente, del IV Frente de las FARC. Los mafiosos juzgaron conveniente invertir sus capitales precisamente en regiones como Antioquia, la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, donde los precios de la tierra se habían derrumbado ante la actividad de los rebeldes. Escobar y Rodríguez Gacha decidieron exhibir sin reserva sus riquezas en el Magdalena Medio. En 1979 don Pablo compró en La Dorada, a medio camino entre Bogotá y Medellín, la hacienda Nápoles, con sus 2.000 hectáreas en la margen derecha del río Magdalena. Un hombre empleaba casi una hora para llegar andando desde la entrada hasta la casa principal, La Mayora, y cinco días a caballo para recorrer su perímetro.

En pocos años la había equipado con una pista clandestina de aterrizaje, llamada Mama Rosa, custodiada por decenas de hombres armados, varias villas, piscinas, caballerizas, campos de fútbol, de tenis y de golf, y una plaza de toros. Se destacaba un zoológico con 2.000 animales traídos de todos los continentes, entre los que se veían jirafas, hipopótamos, elefantes, tigres, antílopes, canguros, alces y rinocerontes. Asimismo, habían sido reconstruidos a tamaño natural los esqueletos de un dinosaurio, un brontosauro y un mamut, animales extinguidos, por desgracia, como explicaban las hojas publicitarias del zoológico. En un reportaje de *Forbes* se decía que “Escobar ha tenido más problemas legales en Colombia con la importación de animales exóticos que con la exportación de cocaína”. Más problemas tuvo, en realidad, la juez Carmencita Londoño cuando investigó aquel extravagante tráfico. En mayo de 1986 recibió una carta amenazadora que le decía, entre otras cosas:

Es una desgracia que usted, sin mostrar respeto por la ley y la propiedad, quiera poner a Pablo Escobar en la cárcel por haber traído progreso a Colombia y contribuido a la naturaleza y a la fauna silvestre de nuestro país... Le garantizamos que usted no logrará un ascenso en su carrera profesional, sino más bien un descenso a las profundidades de la muerte, que es todo lo que usted se merece.

Una semana después, la Londoño cayó en el centro de Bogotá bajo los disparos de dos matones en motocicleta. El homicidio no redujo la afluencia al zoológico, el más surtido y el único gratuito del país. “Es del pueblo y el pueblo no puede pagar por visitar lo que es suyo”, afirmaba don Pablo. Más tarde se descubrió que el jefe no pensaba sólo en la educación científica popular, sino que utilizaba los excrementos de las fieras para impregnar con su olor las bolsas destinadas al transporte de la cocaína, con el objetivo de despistar a los perros antidroga. El exhibicionismo de Escobar no conocía límites. Para no dar lugar a dudas sobre el origen de su fortuna, don Pablo mandó colocar a la entrada de Nápoles el pequeño Piper en el que había transportado personalmente la primera carga de cocaína a Florida. Durante una década, la avioneta pudo verse desde la carretera que une a Bogotá con Medellín. También hizo colocar sobre un pedestal de mármol, en la explanada situada frente al zoológico, un automóvil de los años treinta acribillado a balazos, que había pertenecido, según afirmaba con orgullo el jefe, nada menos que a la pareja de bandidos norteamericanos Bonny Parker y Clyde Barrow.

Rodríguez Gacha no era mucho más discreto. Había comprado a un esmeraldero, (al que más tarde haría fusilar, junto con veinte personas más, por un pelotón militar a su servicio), en la margen izquierda del río Magdalena, la hacienda El Sortilegio. En ella hizo construir el más moderno criadero de gallos de pelea –una de sus grandes pasiones–, que levantó ampollas entre los campesinos de la región por las instalaciones de aire acondicionado con las que había equipado las jaulas. Pero la finca se hizo famosa porque su picadero hospedaba el maravilloso alazán Tupac Amaru, al que apodaban Caballo alado, destinado solamente a la reproducción –cada monta podía costar hasta 10.000 dólares–, dado que no se le permitía participar en ninguna carrera por demostrarse invencible. Cuando Rodríguez Gacha caracoleaba sobre su soberbio caballo por Puerto Boyacá, la Policía llegaba a detener el tráfico.

El Mexicano pagó gran parte de los 800.000 dólares estipulados por los cursos a cargo de Yair Klein y los instructores de la sociedad

Spearhead. Dotó a sus alumnos de uniformes del ejército de Tel Aviv, y fusiles ametralladoras Galil y Uzi, provistas de miras telescópicas,³ les impuso una disciplina de hierro. Al concluir la exhibición de febrero, los treinta sicarios diplomados cantaron el himno de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam): “Un día fuimos comunistas/ obligados a luchar/ por doctrinas que llegaron/ y están contra la paz. Nuestro lema es defender/ nuestros hijos, nuestros bienes/ nuestras tierras/ y lo vamos a lograr”. Después hicieron disparos al aire gritando: “¡muerte a los comunistas, muerte a las FARC!”

Hacía años que numerosos latifundistas del centro agrícola de Colombia se estaban apoderando por la fuerza de los terrenos de miles de pequeños y medianos propietarios, asfixiados por las tasas, o vacuna ganadera de las FARC. Algunos fueron obligados a vender su propiedad a precios irrisorios. “Si no firmas hoy, tratamos mañana con la viuda”, era la frase ritual. La estrategia antiguerrilla de “quitar el agua al pez” había llevado a la eliminación de más de 5.000 personas entre 1982 y 1985, y era a veces un pretexto para acabar con sindicalistas, braceros o acreedores de los latifundistas.

Un paramilitar arrepentido confesó que había matado a un leñador por encargo de Carlos Delgado, que era un propietario de tierras y miembro de Acdegam.

Yo y el sargento Medina lo capturamos, lo llevamos hasta la orilla del río y yo personalmente lo indagué y no vi razones para hacer daños a ese señor y le manifesté al sargento que ese señor no era ningún guerrillero, que era un tipo trabajador pero él me manifestó que don Carlos había dado la orden y había que creerle, entonces se le arrimó y Medina le metió un tiro en la cabeza y dos en la espalda... lo tiramos al río... Yo averigüé por mis propios medios que Carlos Delgado le debía a Marín cinco años de trabajo... entonces para no pagarle había hablado con el sargento.⁴

Antonio Caballero, el periodista colombiano más famoso, escribió en *El Espectador* que “el río Magdalena es la columna vertebral de Colombia y por él (ahora que los pesticidas han matado a los peces) sólo bajan cadáveres de hombres asesinados”.

3. Sobre las actividades de los mercenarios israelíes y sobre el export de Israel en Colombia, véase Cockburn y Cockburn (1991).

4. Los testimonios sobre la muerte del leñador por motivos económicos, en *Tras los pasos perdidos de la guerra sucia* (1995).

En el mismo periódico denunció Gabriel García Márquez que los autores materiales del genocidio son bandas armadas de pistoleros a sueldo, que matan a pleno día, una vez a cara descubierta y otras con la cara pintada, y a quienes todo el mundo conoce pero no se atreve a denunciar. Su método, por desgracia, es inmemorial en la historia de Colombia, y nos resulta familiar por su barbarie. Los cadáveres que flotan en las aguas o que yacen sin dueño en las veredas, han sido despellejados a cuchillo, y aparecen con los órganos cortados y a veces metidos en la boca, sin lengua y sin orejas.

Las masacres sucedían con total impunidad y con el visto bueno del poder y de la prensa del régimen, comenzando por *El Tiempo*, el diario más vendido, que definía a Puerto Boyacá como “la capital antisubversiva de Colombia”, y así aparecía escrito en letras mayúsculas sobre un enorme cartel colocado a la entrada de la población.

La limpieza política era financiada a pleno día en el Magdalena Medio por la Texaco, que pagaba a los batallones que actuaban en la zona, gracias a la legalización de los acuerdos privados entre las multinacionales y el ejército colombiano. Para extenderse a otras regiones necesitaba, sin embargo, capitales enormes, como los de Escobar y Rodríguez Gacha. Los hermanos Pérez, que pertenecían a los latifundistas más aguerridos de la zona, dijeron a sus hombres: “muchachos, vamos a trabajar un poco para la mafia”.

El curso de sicariato, organizado en 1988 por la sociedad de Yair Klein, reforzó la alianza de los narcos con el movimiento paramilitar que estaba surgiendo.

El ex coronel israelí consideraba tranquila aquella misión en Colombia. Había sido contratado por una sociedad del Ministerio de Defensa colombiano, gracias a la mediación de un paisano suyo, Eitan Koren quien, tras haber sido el responsable de la seguridad del premier Menachem Begin, representaba en América Latina a la empresa militar Israel Security Defense System (ISDS). En aquella época Colombia era el mejor cliente comercial de la industria bélica israelí, con encargos de 500 millones de dólares. A su llegada al aeropuerto de Bogotá, Klein había sido recibido por un mayor de los servicios secretos. Antes de salir hacia el Magdalena Medio se había contactado con otros oficiales del ejército colombiano, con un senador, algunos directivos del Banco Ganadero y hasta con un viceministro que, con lágrimas en los ojos, había definido a los instructores israelíes como “la última esperanza de Colombia antes de que se convierta en otra Cuba o Nicaragua”.

Los mercenarios que acompañaban a Klein a Puerto Boyacá eran personajes totalmente respetables de los servicios secretos del Estado hebreo. Entre ellos se encontraban Abrahán Txadaka, ex comandante de las unidades de antiterrorismo de las fuerzas armadas de Tel Aviv; el teniente coronel Amatzia Shuaili, instructor de las tropas especiales guatemaltecas; Michael Harari, jefe de seguridad de la organización secreta Lakam, comprometida en el desarrollo de los programas israelitas, y el agente Arik Afek, que resultó implicado en la triangulación de armas y droga a favor de los contras nicaragüenses.

Ya en Puerto Boyacá, los israelíes fueron recibidos por el comandante del batallón Bárbula. La hacienda en la que se desarrollaban los cursos de formación era punto de afluencia de oficiales y suboficiales, a quienes les gustaba competir al tiro al blanco con los israelíes y sus alumnos.

Klein se sentía tan seguro de sí mismo que permitió al ex teniente Óscar Echandía, coordinador de los cursos a cuenta de Adegam, filmar un video de promoción para la Spearhead en Colombia. La cámara no grabó a los patrocinadores de la escuela de sicariato, lógicamente, sino solamente a Klein y Shuali, y a sus alumnos, entre los que sobresalía un gigante negro de casi dos metros.

Pablo Escobar aportó su cuota para financiar al ejército paramilitar en formación, aunque prefería ir a los partidos de fútbol que a las exhibiciones de los mercenarios. En noviembre de 1987 jugó en un torneo organizado dentro de su hacienda Nápoles contra los ases del Nacional de Medellín. Al acabar el partido, el acrobático portero René Higuita entregó una medalla a don Pablo, que como muchos sabían, era el dueño del equipo que dos años antes había disputado la Copa Intercontinental al Milán de Van Basten. Rodríguez Gacha intentó a menudo convencerlo de la utilidad del proyecto anticomunista de Puerto Boyacá. “Si le ayudamos a vencer a sus enemigos, el Estado nos dejará dedicarnos tranquilamente a nuestros negocios”. Don Pablo, que había conocido de cerca el mundo de la política, seguía con sus dudas. Más tarde afirmó que nunca había compartido las ideas de El Mexicano, sino que había intentado convencerlo de no seguir con el exterminio de la gente de izquierda.

Escobar estaba empeñado sobre todo en la guerra contra la extradición, llevada adelante al son de homicidios y secuestros, y en la que resultaba aliado de la izquierda, en lucha “contra el imperialismo yanqui”. El secuestro de Pastrana, futuro presidente de la República, en enero de 1988, sumó un punto a favor del jefe. Lo cierto es que, si unas semanas antes el ministro de Justicia había emitido cinco órdenes de captura que

incluían además la autorización para la inmediata extradición a Estados Unidos –y Escobar figuraba como primero de la lista–, unos días después del secuestro de Pastrana, el Consejo de Estado las suspendió.

Don Pablo se hallaba comprometido asimismo en la guerra, todavía más sangrienta, contra los enemigos de Cali, que también disponían de bandas de sicarios y de instructores extranjeros. Utilizando la mediación de los servicios colombianos, los Rodríguez Orejuela contrataron a un grupo de ex agentes del Special Air Service (SAS), comandado por los coroneles Peter McAleese y Dave Tomkins. En junio de 1989 utilizaron un helicóptero de la policía colombiana para un ataque sorpresa desafortunado, proyectado con ayuda de la CIA, que intentó sorprender y matar al jefe de Medellín.⁵ Un grupo de policías al servicio del Cartel de Cali se había atrevido a colocar unos meses antes, el 13 de febrero, un coche bomba delante del edificio Mónaco, en el barrio “bien” de Poblado de Medellín, donde residía su familia. La explosión, además de pulverizar a dos vigilantes, produjo una lesión crónica en el oído de su hijita. Fue una afrenta intolerable para el jefe, que había amenazado de muerte en más de una ocasión a quien osara “tocar un pelo” a sus familiares. En septiembre de 1984, por ejemplo, había descubierto y exterminado a una banda entera de pobres diablos que habían secuestrado a su padre Abel. En agosto de 1989 reivindicó la muerte de un coronel de policía, por haber retenido e impedido durante unas horas que su mujer, María Victoria, diera el biberón a la pequeña Juana Manuela.

Así pues, el desarrollo del proyecto paramilitar quedó exclusivamente a cargo de Rodríguez Gacha y sus aliados anticomunistas, civiles y militares.

Juntos decidieron enviar al grupo de sicarios entrenados por Klein a Urabá, la región limítrofe con Panamá, utilizada para el tráfico ilegal de droga y de armas, riquísima en materiales preciosos, y adecuada por su exuberante naturaleza para cultivos intensivos. En aquella zona se había instalado a comienzos de los años sesenta la United Fruit con el propósito de dedicarse al cultivo del banano, convertido en el tercer producto de exportación de Colombia, después del café y del petróleo.

Las plantaciones de Urabá, que comercializaban la fruta con las marcas Del Monte, Dole y Chiquita, ocupaban en 1988 a casi 30.000 braceros, obligados a trabajar hasta 70 horas semanales, sin seguros ni asistencia sanitaria, y viviendo con sus familias en tugurios sin luz, agua

5. Sobre la actividad de mercenarios ingleses en Colombia, véase Guillén (1993).

corriente, ni desagües. Las condiciones inhumanas –que provocaban la muerte por tuberculosis de uno de cada cuatro trabajadores– favorecieron la expansión de los sindicatos, a pesar de la violenta oposición de los latifundistas, más propensos a resolver los conflictos laborales a disparos que a través de negociaciones.

El acaparamiento de tierras efectuado por las compañías bananeras, y por muchos políticos, generales y narcotraficantes, había provocado la expulsión de decenas de miles de campesinos, pero asimismo había favorecido la expansión de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL). El círculo vicioso no podía sino aumentar la violencia. La guerrilla imponía el pago de fuertes comisiones a los latifundistas de la zona, amenazándolos con el secuestro y, eventualmente, con la muerte. Éstos, a su vez, crearon milicias privadas o pagaron para su protección a los oficiales de los batallones del ejército que operaban por la zona.

Los sindicalistas fueron asesinados uno tras otro. “Cuando los empresarios ven que un empleado se prepara y tiene condiciones para discutir con ellos, es hombre muerto”, manifestaron algunos braceros a la enviada de *El Espectador*. En los últimos seis meses de 1987 fueron muertos 39 dirigentes sindicalistas en la región. Cada huelga era precedida o seguida por decenas de funerales.

El ejército y la policía, que se demostraban incapaces de detener a un solo matón, tomaban partido claramente en favor de los latifundistas. “Aquí en Urabá existen movimientos sindicales con brazo armado”, afirmó el comandante de la brigada que operaba en la región. También caían bajo los disparos de los sicarios los militantes de la Unión Patriótica (UP), el movimiento de izquierda que había conseguido en las últimas elecciones las principales alcaldías, como Turbo y Apartadó. Lo mismo sucedía a los exponentes del Nuevo Liberalismo, el ala progresista del Partido Liberal.

En la misma fecha que finalizó en Puerto Boyacá el primer curso de sicariato, algunos pelotones del batallón Voltígeros entraron en un barracón de trabajadores bananeros y detuvieron a cuatro braceros, entre quienes se hallaba una joven embarazada de 16 años. Ésta acusó, después de diez días de tortura, a un grupo de conocidos suyos de militar en la guerrilla.⁶ En las noches siguientes fue llevada en un todoterreno con cristales opacos para que señalara a los presuntos guerrilleros en los poblados de Honduras y La Negra. Los cuatro braceros fueron entregados al

6. Sobre la masacre de “Honduras” y “La Negra”, véase Liga Internacional para la Defensa de los Derechos y la Liberación de los Pueblos (1990).

juez dos semanas después de su arresto, una práctica facilitada por el Estatuto Antiterrorista para combatir a los narcos y aplicado casi exclusivamente a los opositores políticos y sociales. Posteriormente se descubrió que en el acta de los interrogatorios figuraba como abogado defensor un oficial que había participado activamente en las torturas a los detenidos.

Aquella operación fue dirigida por el mayor Luis Felipe Becerra, el mismo que unos días más tarde pagaría con su tarjeta de crédito la estancia en el Hotel Intercontinental de Medellín del grupo de matones de Puerto Boyacá que se dirigía a Urabá. La compleja máquina de muerte se puso en marcha en la noche de plenilunio del 4 de marzo. A la una de la madrugada los habitantes del miserable campamento de la hacienda Honduras fueron despertados por la llegada de algunas todoterreno y los gritos de un grupo de hombres armados. “¡Abran todas las puertas!”, fue la primera orden inteligible. Rodearon sin más la barraca de los solteros, que fueron empujados fuera y obligados a tumbarse sobre el empedrado del patio central. Tres de ellos lograron milagrosamente salvarse, escondiéndose bajo el techo. La gente, aterrorizada, distinguió a la entrada del campamento la sombra de dos camiones llenos de soldados, inmóviles. Nadie se ilusionó de que acudirían en su ayuda.

El jefe de los milicianos era un gigante negro, con un gorro rojo. Algunos de ellos gritaban “¡Muerte al EPL!” “¡Vivan las FARC!”

En unos segundos reunieron a 17 braceros, todos ellos afiliados al sindicato. Los familiares, encerrados en sus casas, no podían hacer otra cosa que rezar y llorar. Primero oyeron los gritos de algunos jóvenes mientras les arrancaban las uñas. Después, una ráfaga aislada y, finalmente, una descarga interminable de disparos. Se oyó “¡Cabo, hay uno vivo!” al hacerse silencio. La última ráfaga acabó con Pedro, un bracero de 25 años. El primero que murió fue Alirio que, aprovechando un momento de descuido del comando, había tratado de huir, pero fue alcanzado y asesinado en medio del campo donde solían jugar fútbol los trabajadores el domingo por la tarde.

Antes de marcharse, escoltados por los dos camiones militares, los asesinos quemaron el cobertizo bajo el que se hacían las reuniones sindicales, y destruyeron el pequeño camión de la comunidad utilizado para el transporte escolar. Sin embargo, no habían concluido su incursión. En la hacienda cercana, La Negra, mataron delante de sus familiares a otros tres braceros. Cuando empezó a clarear en la hacienda Honduras, las mujeres lloraban junto a los cuerpos casi decapitados de sus hombres, alcanzados en pleno rostro por balas explosivas. Otras vagaban sin tino. Se

veían buitres sobrevolando cuando llegaron varios camiones llenos de militares del batallón Voltígeros. Los sobrevivientes reconocieron entre ellos al gigante negro que había dirigido unas horas antes el comando homicida. Los soldados se preocuparon solamente de recoger los casquillos esparcidos por el terreno, en medio de los charcos de sangre coagulada y de fragmentos de masas cerebrales. Un oficial hizo algunas preguntas pero no le respondió nadie. Los sobrevivientes empezaron a protestar sólo cuando los militares cargaron en un camión los cadáveres y se marcharon sin esperar la llegada de las autoridades judiciales. Inmediatamente después la comunidad entera se puso en marcha hacia Apartadó, donde pudo refugiarse en la parroquia de la Divina Eucaristía.

Aquella misma tarde del 4 de marzo de 1989, un grupo de hombres encapuchados obligó a descender de un autobús que se dirigía a Medellín a ocho hombres del movimiento de izquierda A Luchar que estaban dejando la región. Sus cuerpos torturados fueron hallados dos días más tarde en un bosque cercano. En esa misma fecha comenzaron una huelga indefinida 22.000 trabajadores bananeros, exigiendo la destitución del general Sanmiguel Buenaventura, y el nombramiento de una comisión presidencial que investigara las matanzas. El gobierno central se deshizo en condenas y promesas de justicia. Para aclarar aquellos “genocidios perpetrados por grupos antisociales”, designó a 30 de los mejores agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el único servicio secreto que dependía directamente del presidente de la república. Fue decretado el estado de sitio en Urabá, y nombraron gobernador militar de la región a un mayor que, unos años antes, había sido señalado por una comisión investigadora de la Procuraduría como uno de los fundadores de los primeros grupos paramilitares. En las calles de Turbo y Apartadó se decía en voz baja que “el remedio es peor que la enfermedad”.

La matanza, sin embargo, no había terminado. El 3 de abril fueron asesinados 28 campesinos del poblado La Mejor Esquina, en el vecino corregimiento de Buenavista, sorprendidos durante una fiesta. Ocho días más tarde les tocó a 26 campesinos de Punta Coquitos. También en dichas ocasiones estuvo el gigante de color llevando la lista de los condenados a muerte.

La investigación de aquellas masacres corrió a cargo de la joven juez Martha Lucía González. Los testimonios de los sobrevivientes, las contradicciones de los militares halladas durante los interrogatorios, y las confesiones de los primeros arrepentidos, la convencieron de la responsabilidad de varios oficiales, entre quienes figuraban algunos comandantes de batallón y de brigada.

Según avanzaban sus indagaciones aumentaba el nerviosismo del ejército. En el mes de agosto siguiente, el procurador general de la nación, Horacio Serpa, comunicó en una carta al presidente Virgilio Barco que las masacres “no son errores, actos de venganza o actos irracionales de individuos que han unido sus fuerzas para sacrificar colombianos aquí y allá. Todos estos actos tienen el carácter de crímenes políticos o adhieren a ciertas ideologías, para intimidar a comunidades enteras, para mantener un cierto *status quo* económico”. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El ministro de Defensa polemizó con los sectores “anhelantes de que haya militares comprometidos en esas masacres”. El presidente Barco trató de tranquilizar al ejército, prometiendo que aumentaría la plantilla y la financiación de las Fuerzas Armadas. El ministro César Gaviria, que unos meses antes había denunciado la presencia en el país de 128 grupos paramilitares, declaró en televisión que eventuales acciones ilegales de militares en activo no podían haber sido realizadas sino a nivel personal, y aseguró que la violencia del país debía ser imputada al acuerdo entre narcotraficantes y terroristas.

Escondido tranquilamente en uno de sus innumerables refugios secretos, y protegido por un cordón de seguridad de cientos de hombres armados, dispuestos a jugarse la vida por él, don Pablo no se perdía un solo noticiero. Cuando escuchó el discurso de César Gaviria, que en un par de años se convertiría en presidente de la República, intuyó que la estrategia anticomunista de su socio, don Gonzalo, acabaría llevando a un callejón sin salida al cartel de Medellín. Lo iban a convertir en chivo expiatorio. Y todavía se convenció más cuando leyó el texto de los primeros informes “estrictamente confidenciales” del DAS sobre las matanzas de Urabá, filtrados a la prensa colombiana.

Mientras la juez González llamaba a testificar a oficiales de grado cada vez más alto, el DAS desviaba la atención hacia otros sujetos de la alianza paramilitar: a varios latifundistas de Acdegam y a los narcos de Medellín. A finales de abril, el servicio secreto dirigido por el general Miguel Maza Márquez, pariente lejano de Gabriel García Márquez, entregó a la prensa un informe que atribuía las masacres a un grupo de justicieros llamados Los Magníficos o Amor por Colombia, que trabajaban para los propietarios de las bananeras, “presionados por la subversión”. El DAS exoneraba de toda responsabilidad como mandante o cómplice de los estragos al personal militar.

Mientras tanto, en Puerto Boyacá todo ocurría tranquilamente. En mayo de 1988 Yair Klein empezó el segundo curso de sicariato, que solamente fue interrumpido porque muchos alumnos se presentaban ebrios a los ejercicios. El tercer curso, por su parte, hubo de ser transferido a una

hacienda de Rodríguez Gacha en la región del Putumayo, a raíz de un rastreo de la Policía antinarcóticos por la zona.

En aquella ocasión Klein comenzó a darse cuenta de la complejidad del rompecabezas colombiano. “Era muy curioso que el ejército, por un lado, apoyara a Acdegam y que, por otro, la policía quisiera hacer un operativo contra el campamento”, contará algunos años más tarde el ex coronel israelí.

Después de unos años en que las denuncias del genocidio en el Magdalena Medio fueron liquidadas como “fruto de la propaganda comunista”, la justicia comenzó a actuar. Pero indagar en esta región resultaba peligroso incluso para los funcionarios del Ministerio de Justicia. La juez González se dirigió inútilmente un par de veces a Puerto Boyacá para interrogar a los militares denunciados. El ejército y la policía local la boicoteaban a porfía, obligándola a esperas desquiciantes, cambiando improvisadamente los programas y llegando a declarar que no podían garantizar su seguridad. No escatimaron medios para hacerla desistir de su intento. Desconocidos la llamaban por teléfono a altas horas de la noche interesándose por la salud de sus familiares. Otros le colocaban bajo las sábanas montones de escarabajos o ratas muertas en los albergues donde se alojaba durante sus misiones.

La juez González no se dejó intimidar. El 25 de junio firmó varias órdenes de captura contra narcos como Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y Hernán Giraldo, el jefe de la Sierra Nevada, así como contra los dirigentes de Acdegam, el alcalde de Puerto Boyacá y, por vez primera, contra militares en activo: un teniente y un cabo. Según la juez González, ambos “aceptaron, facilitaron, auxiliaron y permitieron el genocidio del 4 de marzo”. El 31 de agosto añadió a su lista al mayor Luis Felipe Becerra. Fue su última actuación judicial. Un atentado frustrado en el centro de Bogotá la convenció de aceptar un cargo diplomático en la embajada de un país cuyo nombre se mantuvo en secreto.

Para entonces ya habían sido eliminados cinco campesinos de Urabá que se habían atrevido a testificar sobre las matanzas. Unos meses más tarde, dos sicarios en moto mataron en pleno centro de Bogotá a su padre Álvaro, ex gobernador del departamento de Boyacá, en la clásica “venganza transversal”.

La misma suerte corrió la juez que la sustituyó. Tras haber recibido varias amenazas de muerte, María Helena Díaz fue asesinada junto con dos policías de su escolta el 28 de julio de 1989 por un grupo de hombres encapuchados. Aquellos homicidios fueron atribuidos a la “mafia de la droga”. Pocos días antes de ser asesinada, la juez Díaz había ratificado las órdenes de captura emitidas por su colega. Fue una decisión tan va-

liente como inútil, dado que ninguna autoridad se tomó la molestia de ejecutarlas. Mientras Escobar, los demás narcos y los paramilitares estaban protegidos por sus milicias privadas, los militares implicados tenían el amparo de la jefatura de las Fuerzas Armadas.

Alejado del cuerpo a finales de 1988, el mayor Becerra fue posteriormente reintegrado y ascendido a teniente coronel. Un año más tarde se le envió a un curso militar de seis meses en Fort Bragg y de allí pasó a la dirección de la Oficina de Relaciones Públicas del ejército, cargo que le llevó a frecuentar los encuentros de la prensa extranjera en Bogotá. En diciembre de 2003 el Estado colombiano resarcó con 1600 millones de pesos a los familiares de 13 campesinos, víctimas de la masacre realizada diez años antes en Riofrío, en el departamento del Valle, condenando a 12 meses de arresto a Becerra, quien para entonces había fallecido, tras haber sido ascendido a coronel.

El alcalde de Puerto Boyacá continuó tranquilamente en su puesto y organizó un concurrido Foro por la defensa del honor y la dignidad del Magdalena Medio, en el que participaron representantes del gobierno, diputados, altos oficiales en activo y en retiro, y el presidente de la poderosa Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Volviéndose éste a los directivos de Acdegam les dijo: “No están solos. Somos sus hermanos, somos sus amigos y sus admiradores”.⁷ En el mes de febrero siguiente, el gobierno suspendió al alcalde, que fue detenido por tenencia ilícita de armas, y liberado tres horas más tarde por un comando armado.

Después del exilio forzoso de González y el sacrificio de Díaz, el Tribunal Especial de Orden Público decidió ahorrar otras muertes inútiles y revocó todas las órdenes de captura, exceptuando la emitida contra un miembro del grupo paramilitar Los Magníficos. Vale decir que, transcurrido año y medio, y con 90 muertos –entre braceros, sindicalistas, jueces, hombres de escolta, testigos– solamente él había terminado en prisión por las masacres de Urabá. La máquina de la muerte sufrió, sin embargo, un percance imprevisto. En junio de 1989 el Noticiero Nacional transmitió el video de promoción de la *Speardhead*, filmado en la granja El Cincuenta. El ex capo militar de Acdegam, Óscar Echandía, había entregado una copia a un redactor, deseando hacer más creíble su disociación del castillo narco-paramilitar, que a su juicio estaba ya agrietándose.

Para los colombianos fue traumático ver a los aprendices de matones disparar y lanzar granadas como locos.

7. *El Tiempo*, 25 de agosto de 1988.

Cuando el video fue distribuido en todo el mundo por la cadena norteamericana CBS, el Estado colombiano fue presa del pánico. El ministro de Defensa, general Óscar Botero, y el director del DAS, Maza Márquez, comenzaron un baile de mentiras y admisiones a medias. Se pasó del inicial “no tenemos ninguna información al respecto,” a la confirmación de que Klein había sido recibido a su llegada a Bogotá por algunos oficiales del ejército quienes, en todo caso, “no actuaron en nombre del gobierno ni del Ministerio de Defensa”, según afirmó Botero ante el Senado. El video arrojó un poco de luz sobre las masacres de Urabá. Algunos sobrevivientes reconocieron en el desertor de las FARC, Luis Alfonso de Jesús Baquero, apodado el Negro Vladimiro, al gigante que iba al mando del destacamento asesino.

Ante las dimensiones del escándalo, el Estado colombiano se vio en la necesidad de sacrificar a alguien. La elección recayó en el teniente coronel Luis Bohórquez, que pagó de esa forma la acogida reservada unos meses antes a Yair Klein. Fue destituido y definido como “enemigo de la paz” por el ministro de Defensa. Al oficial no le gustó ser vendido como la excepción que confirma la regla, y se defendió de todas las maneras. En una conferencia de prensa a raíz de su destitución, afirmó: “Luzco este camuflaje y no voy a permitir que lo mancillen... Soy un fanático del no a la subversión”. Más tarde, en una carta publicada sin comentario alguno por los periódicos colombianos, recordó que “los grupos de autodefensa responden a una política del gobierno”, y que varios generales conocían la situación existente en el Magdalena Medio. “Jamás me hicieron una leve llamada de atención”.⁸ En la misma carta, Bohórquez manifestó que Yair Klein había llegado a Puerto Boyacá para “cumplir una misión legal”. El oficial también hizo circular una fotografía en la que aparecía en Puerto Boyacá, en agosto de 1988, con el embajador norteamericano Charles Gillespie, quien visitaba asiduamente la “capital antisubversiva” de Colombia.

En cuanto se apaciguó la opinión pública, Bohórquez fue reintegrado y asignado a la Dirección de los Servicios de Seguridad del ejército. En el año 1991 amenazó con nuevas revelaciones sobre los vínculos entre el grupo de Klein y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Probablemente tensó demasiado la cuerda. El 24 de julio fue asesinado por dos sicarios en moto en el centro de Bogotá. Los periódicos no echaron esa vez la culpa a Escobar. Don Pablo tenía otras preocupaciones. Desde hacía casi un mes estaba preso en la cárcel de “cinco estrellas” de La Catedral, en la que transcurrió otro loco capítulo de su vida criminal tan llena de aventuras.

8. *El Espectador*, 13 de octubre de 1989.